



Hola, muy buenas noches a todos y bienvenidos al madrileño barrio de Lavapiés.

Soy Ramiro Viñuales, Secretario General y candidato a la Presidencia del Gobierno del partido político Por un Mundo más Justo (PUM+J) y lo primero que quiero hacer es DAROS LAS GRACIAS a todos por EL ESFUERZO de haberos acercado solidariamente hasta aquí para DENUNCIAR una realidad de la política migratoria de España: LA PRIVACIÓN DE LIBERTAD DE LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN IRREGULAR EN ESPAÑA PARA SU EXPULSIÓN FORZOSA DE NUESTRO PAÍS.

El partido político Por un Mundo más Justo (PUM+J) defiende en su programa electoral *"una política sobre MIGRACIÓN que apueste por la construcción de una España más solidaria, fraterna, acogedora y que vele por el desarrollo integral de las personas, los pueblos y la humanidad"*. Consideramos que este principio se corresponde con valores y obligaciones de derechos humanos y debería guiar la acción estatal fuera y dentro de nuestras fronteras.

Sólo aplicando un cambio de modelo a las relaciones internacionales, y asegurando oportunidades de desarrollo a los países más pobres, podrá alcanzarse una solución estructural de largo plazo que permita eliminar las causas de las migraciones económicas.



A su vez, España debe ser un país abierto y solidario con quienes menos tienen, y respetuoso con los derechos de todas las personas, independientemente de su origen y situación administrativa.

En contraste con lo anterior, asistimos a una política migratoria de criminalización de las migraciones que abusa de los mecanismos legales previstos para el control de fronteras utilizándolos de manera altamente represiva y aflictiva para las personas migrantes. Las denuncias sobre redadas policiales indiscriminadas contra personas que son detenidas en función de su origen o raza; las deplorables condiciones de los CIE y las denegaciones masivas de asilo son un buen ejemplo de ello.

En concreto, las redadas policiales para identificar migrantes en situación irregular por la calle deben ser eliminadas y los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) deben de ser cerrados de manera inmediata, por la falta de respeto a los derechos y dignidad de las personas extranjeras que son actualmente retenidas en esas instalaciones.

Las personas allí encerradas se encuentran encarceladas por periodos de hasta 60 días, generalmente por motivos de carácter administrativo. Sus principales quejas versan sobre la falta de información e intérpretes, las dificultades de comunicación con sus familiares y amigos, los castigos generalizados, la deficiente atención médica y social, cuando no su ausencia, la falta de respeto de muchos policías, su trato intimidatorio y amenazas que llegan en muchos casos a lesiones o malos tratos y las dificultades o imposibilidad de formular quejas...



SE TRATA DE UNA SITUACIÓN INSOSTENIBLE EN NUESTRO ESTADO DE DERECHO QUE VIOLA DE MANERA SISTEMÁTICA LOS DERECHOS HUMANOS UNIVERSALES.

A nuestro juicio, los CIE son “cárceles encubiertas” que vulneran el derecho internacional, disposiciones constitucionales y obligaciones de derechos humanos. Por ello, el partido político PUM+J defiende que la única forma de asegurar una política de control de las migraciones en consonancia con las obligaciones del Estado español es asegurar su cierre inmediato.

Entre tanto ésto se materializa, se deben aplicar medidas urgentes y enérgicas para garantizar los derechos humanos de las personas bajo custodia (la asistencia médica y social en todos los CIEs, la formación específica de los funcionarios en la gestión de privaciones largas de libertad y respeto a los derechos humanos). También debe realizarse una revisión exhaustiva de la normativa de extranjería, como por ejemplo, el papel fundamental de los Juzgados de control del CIE y garantías de los internos así como la elaboración urgente a comienzos de la próxima legislatura de un Reglamento del funcionamiento de los CIE españoles que garantice el respeto a los derechos de las personas internadas y así poder asegurar que sus disposiciones son respetuosas con las obligaciones internacionales de derechos humanos del Estado español.



PUM+J SEGUIRÁ ARTICULANDO ESFUERZOS CON EL AMPLIO MOVIMIENTO SOCIAL QUE DENUNCIA LA ACTUAL POLÍTICA MIGRATORIA ESPAÑOLA.

Por eso pedimos y exigimos el cierre inmediato de los CIEs y mientras se logra ese objetivo, solicitamos la necesaria la aplicación de controles rigurosos y la adopción urgente de un Reglamento que mejore significativamente las condiciones actuales de funcionamiento y el control de los Centros de internamiento de Extranjeros en España.

Muchas gracias.